

tiva una demanda de la competencia de los Tribunales de la Federacion, como lo determina la ley que estableció la facultad económico-coactiva, resultando, por consecuencia, con los procedimientos de la Gefatura de Hacienda, violada la garantía otorgada en la parte final del artículo 14 de la Constitucion de la República. Con tales fundamentos se decreta:

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Aguascalientes, que negó el recurso de amparo á la Sra. Diaz de Leon, albacea y representante de la testamentaría de su finado esposo D. Simon Ortuño.

Segundo: Se ampara y protege á la quejosa contra el acto de la Gefatura de Hacienda, que mandó rematar unos terrenos pertenecientes á la testamentaria, despues de la oposicion de la albacea, que motivaba un juicio ante los Tribunales federales.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Iramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el ciudadano Lic. Simon de la Garza y Melo, apoderado de D. Carlos Martinez, contra una orden del Alcalde 1º de aquella capital, por la cual se le manda ejecutar un trabajo personal sin retribucion.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Que está sustanciándose, conforme á la ley respectiva, este juicio de amparo, promovido por el Lic. D. Simon de la Garza y Melo en representacion de D. Carlos Martinez, con motivo de una comision dada por el ciudadano Alcalde 1º de esta ciudad, con fecha 15 de Diciembre del año próximo pasado á este Sr. para que en union de D. José María Cárdenas procediera á formar un padron de todos los niños y niñas de la 3ª seccion de esta Municipalidad, que conforme á la ley del Estado expedida con fecha 30 de Noviembre último, declarando obligatoria la instruccion primaria, deben concurrir á la escuela, ya pública, ya particular, cuyo trabajo personal debia estar concluido dentro de los quince dias siguientes; y que no habiendo admitido dicha comision el expresado señor Martinez, excusándose por las razones que expone en su contestacion de fecha 22 del propio Diciembre, se ha, sin embargo, insistido en que la cumpla imponiéndosele, ademas, una multa de cinco pesos, por haber manifestado despues no estar dispuesto á prestar ese trabajo personal, acojiéndose para ello á la garantía que le otorga en su artículo 5º la carta fundamental de la República. Suspenso ya el acto reclamado por auto de 30 de Diciembre último, para cuya pronunciacion se dió la audiencia de que se habla en el art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869; y ren-

dido ya tambien el informe de que trata el artículo 9º de la propia ley, al que ha tenido por conveniente la autoridad acompañar un ejemplar del núm. 49 del *Periódico oficial* del Estado, en que está sancionada la ley en virtud de la que ha nombrado al señor Martinez para tal comision, y ademas dos copias en papel comun, autorizadas por el ciudadano Secretario del Supremo Tribunal de Justicia del mismo Estado, de dos distintas sentencias sobre un mismo punto, dictadas por la 3ª y 2ª Salas de dicho Tribunal, por la analogía de la cuestion que se versa en el caso, y principalmente por la interpretacion que se ha dado á dicho artículo 5º de la Constitucion, exigiéndose tambien un trabajo personal, ó mejor dicho, dándose como bien exigido por la autoridad ese servicio; resta solo que el que suscribe, evacue en el término fijado el traslado que se le ha corrido para que pida sobre lo principal, y siga así sustanciándose el juicio hasta resolverlo por sentencia definitiva, concediendo ó no el amparo pedido.

Celoso el Fiscal, como el que mas, por el adelanto y mejoramiento en todos respectos de su país en general y principalmente del Estado á que se honra de pertenecer, y á cuyo bien y utilidad provee la ley por cuyo cumplimiento se promueve este juicio; pero celoso al mismo tiempo tambien como el que mas, y si se quiere hasta el fanatismo, por la observancia neta de nuestro pacto fundamental, por el respeto á la suprema ley á la Constitucion de 1857, porque comprendo, que solo de esta manera puede en realidad decirse que se ha obrado en nuestro ser y condicion política una completa reforma, que entraña los verdaderos y sólidos principios de adelanto y civilizacion; no puede menos, ahora que un particular considere violadas en su persona las garantías individuales, por causa del cumplimiento de una ley que mira tambien, en su objeto principal, á ese mismo adelanto y progreso de los pueblos, como es sin duda la ilustracion de las masas por medio de la instruccion primaria obligatoria, que tomar con

cuanto empeño y eficacia le sea posible la tarea de averiguar hasta el espíritu de las instituciones que nos rigen para contribuir así indirectamente á la fijacion ó inteligencia que en la práctica convenga dar á nuestros principios constitucionales. Ni por un momento abriga el Fiscal la presuncion de asertar en la investigacion que se propone; pero desde luego manifiesta: que sus opiniones, y lo mas que exponga en esta discusion para fijar la interpretacion de aquellos principios, está todo basado en la buena fé de su ministerio, en el deseo de cumplir religiosamente con su deber, y sobre todo, por corresponder dignamente, y en cuanto de él dependa, á la alta mision que se le confia por la ley en estos juicios, representando ya á la sociedad, ya apoyando tambien á los asociados, segun que la una ó los otros aparezcan tener justicia en sus pretenciones.

Y en el caso propuesto se hace tanto mas necesario entrar en una amplia y clara discusion sobre la inteligencia que deba darse en la práctica al principio ó garantía consignada en el artículo 5º, sobre no poder exigir trabajos personales sin la justa retribucion y sin el pleno consentimiento del que los ha de prestar, cuanto que, ya se citan como interpretaciones autorizadas y aun hasta como ejecutorias, las contenidas en las sentencias á que antes se ha referido el Fiscal; y esto sí que puede alarmar á los demas ciudadanos por el modo como se han interpretado judicialmente las garantías que tienen otorgadas por la Constitucion general, y esto sí, que puede hacerles concebir serios temores en un caso semejante; razon porque el Fiscal, guiado de la mejor y mas buena intencion entra en el exámen que se ha propuesto, para contribuir, como ha dicho, indirectamente y en la esfera de sus funciones ó atribuciones á que se fije la interpretacion de la ley, en esa parte tan esencial de las garantías individuales, y sea tal vez esa interpretacion como fué la mente, al establecerlas, de los sabios legisladores, que las presentaron, dis-

cutieron y sancionaron en la ya mencionada Constitucion de 1857.

Pero ante todas cosas, y para mayor claridad en la discusion, no será fuera del caso consignar textualmente, tanto el precepto constitucional que se cree violado, y en el que está basada la queja de amparo, como la disposicion de la ley del Estado, en cuyo cumplimiento ha nombrado el ciudadano Alcalde 1º la comision expresada; para luego del contesto de una y otra disposicion, y de la investigacion que se haga del espíritu que dominó al establecer el principio constitucional, deducir la consecuencia que resulte del modo ó segun el modo como deba entenderse en la práctica tal principio y consecuencia que en el caso vendrá á contener la opinion del que suscribe, sobre lo que en justicia y conforme al espíritu de la misma ley deba resolverse en la cuestion propuesta. El artículo 5º de la Constitucion general dice textualmente:

"Nadie pueda ser obligado á prestar trabajos personales, sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento," y la ley citada del Estado en su artículo 16 dice:

"Los Presidentes de los Ayuntamientos, tan luego como sea publicada esta ley, nombrarán una comision por cada seccion de la Municipalidad, con el objeto de inscribir á todos los niños y niñas que por su edad estén comprendidos en el artículo anterior, fijándosele para la conclusion de su encargo, un plazo prudente, que no pase de quince dias. Esto mismo harán todos los años al entrar los niños de vacaciones."

Entrando ya en materia, sentados estos precedentes, y teniéndolos á la vista, la cuestion que, en concepto del fiscal, debe discutirse y resolverse, es esta: los trabajos personales que se imponen en el artículo 16 de la ley del Estado, ¿son ó no los de que se habla en el artículo 5º de la Constitucion, como que no se pueden exigir sin los requisitos que allí mismo se mencionan?... Porque si son ó se han de considerar como de los que sí pueden exigirse, atendiendo á su objeto y fin, no cabe duda que en

el caso ha estado en su derecho el ciudadano Alcalde 1º para exigir del quejoso tales servicios; pero si deben considerarse de otra manera, como trabajos personales de los que se habla precisamente en el dicho artículo 5º y que no se pueden exigir sin el pleno consentimiento del que los va á prestar, ya se vé que no se podrán exigir al nombrado para esa comision sin que se dé el requisito de su consentimiento. Y ¿cómo podremos aclarar esta duda, nacida solo en concepto del fiscal, de la interpretacion que se fije al precepto constitucional? Indudablemente que recurriendo á las consideraciones que se tuvieron presentes en el acto de dar la ley, pues que en verdad no hay medio mas seguro, ni guía que con mejores probabilidades de acierto nos puedan hacer comprender el espíritu de las leyes, y por consiguiente su genuina y natural interpretacion, que los razonamientos mismos hechos y sostenidos en la discusion. Así es, que remontándonos hasta el origen de la ley suprema del país, y teniendo presente para conocer el espíritu que en ella dominó, las consideraciones de su existencia y razon de sér, encontramos: que en la discusion del artículo 12 del proyecto de Constitucion, y que viene ahora á ser el quinto, se consideraron las observaciones hechas ahora por el ciudadano Alcalde 1º, sobre si en el artículo que se discutía, estaban ó no comprendidos los trabajos al público ó para con la sociedad; y el Sr. Arriaga, uno de los principales miembros de la comision que presentó el proyecto, contestando á esto, dijo: *"que el espíritu del artículo es que jamas pueda obligarse á nadie á trabajar contra su voluntad."* (Historia del Congreso Constituyente por Zarco.) Sigue el mismo orador sosteniendo la libertad del trabajo, y preguntando luego ¿si puede haber casos en que sea lícito exigir trabajos forzosos? continúa sosteniendo, que no *"pues aun en el caso [dice] de que el trabajo sea obligacion que resulte de algun contrato, si el obligado á trabajar se niega, no se le puede obligar por la fuerza, y la otra par-*

le tendrá solo derecho á la indemnización."

¡Con cuánta mas razon no se deberá exigir nunca un trabajo que no sea consecuencia de un contrato! Y el Sr. Guzman, otro tambien de los principales miembros de dicho proyecto de Constitucion, contestando á una objecion semejante y mas análoga á este caso, dijo: "En los casos de servicios al público, se ve que los ciudadanos los prestan voluntariamente, y cuando se trata de poner estacadas, ú otros trabajos de esta naturaleza, es claro, que el que no quiera trabajar, está en su derecho; que la autoridad lo que puede hacer es, ordenar que los ciudadanos contribuyan periódicamente á estos objetos, como á todos los que son de utilidad pública." Y ciertamente que no podría ser de otro modo, pues de lo contrario, exigiendo á un solo ciudadano cierto y determinado trabajo personal, aunque sea de utilidad pública, se le imponen con esto nuevas obligaciones que no tienen los demas ciudadanos, y se hace así tambien ilusoria la igualdad en los derechos y obligaciones de los asociados para con la sociedad.

Tales fueron, pues, las consideraciones que se tuvieron presentes al discutir y sancionar el artículo constitucional de que se trata; y tal parece fué tambien el espíritu que dominó en aquella época sobre la inteligencia que en la práctica debiera darse al mismo artículo. En vista de todo esto, no cabe la menor duda sobre que los trabajos personales, que en virtud de la ley del Estado se exigen al Sr. Martinez en la comision para que ha sido nombrado, están comprendidos, no obstante su notoria utilidad y beneficio público, en dicho artículo 5º de la Constitucion, y no pueden por consiguiente exigírsele en contra de su voluntad.

Que, en cuanto á estos trabajos ó servicios para el público, se haya dado por las Salas 3ª y 2ª del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al repetido artículo 5º la interpretacion que allí se nota, esto no hace al caso, ni podría servir de guía segura para fijar la interpretacion de la ley se-

gun su espíritu, porque de ninguna manera puede explicarse, en concepto del Fiscal, cómo en una Constitucion política, cuyo objeto es precisamente determinar los derechos y obligaciones de la sociedad para con los asociados, y los de estos para con la sociedad, debieran mezclarse derechos privados de los particulares entre sí, y derechos que no reconocen mas origen que los contratos ó delitos en cuanto á la indemnización; y á estos derechos debieran referirse dicho artículo constitucional al establecer que á nadie puedan exigírse servicios personales sin su pleno consentimiento, cuando se sabe muy bien, que uno es el derecho civil que arregla las relaciones de los particulares entre sí, y otro es el público ó constitucional, que mira á las relaciones de la sociedad para con los asociados y á los de estos para con la sociedad; viniendo á convertirse en obligaciones para la una, los que son derechos para los otros, y viceversa, pues que son correlativos los derechos y las obligaciones. De esta manera sucede, que en el caso en cuestion, es obligacion de la sociedad ó de las autoridades que la representan no poder exigir servicios personales contra la voluntad del que los ha de prestar, porque este tiene el derecho de no poder ser obligado, derecho consignado expresamente en el pacto fundamental vigente.

Tan importante es esta materia sobre la interpretacion de la ley, y de la ley en cuanto á las garantías individuales que otorga, que el error sufrido, aun involuntario y de buena fé, violando sin querer las mismas garantías en un caso dado, hace que todos los demas que se encuentren en las mismas circunstancias, toman tambien por las suyas, porque el error sufrido, tratándose de las garantías, afecta no solo al individuo sino á todo el cuerpo social por la razon antes dicha; resultando de aquí casi siempre el desprestigio de la ley, al menos como imposible en la práctica y solo buena para la teoría. Por esto el Fiscal nunca consideraria bastante discutida y explicada

semejante materia fijando la interpretacion, pero en la imposibilidad de entrar en mayores y mas profundas consideraciones, porque ni la índole de este escrito lo permite, ni habria tiempo para ello, se conforma con lo expuesto, que, por la opinion respetable de los mismos oradores que ha citado, como que tomaron parte en la discusion, juzga suficiente para hacer en este caso la aplicacion conveniente de la ley segun su espíritu.

Mas una vez reconocido que los trabajos exigidos al Sr. Martinez, son de los que, conforme á la Constitucion, no está obligado á prestar sin su consentimiento, y que por consiguiente ha estado en su derecho al manifestar á la autoridad no estar dispuesto á prestarlos, no ha habido tampoco derecho para imponérsele la multa de que se ha hecho referencia y aparece ya como exigida, aunque con la protesta respectiva por parte del multado. Por lo tanto, y si el origen de esa multa ha sido por parte del Sr. Martinez, la manifestacion á la autoridad del derecho que creia tener para no prestar semejantes trabajos, como se indica y deja entender del informe de la misma autoridad ya al concluirlo; opina tambien el Fiscal, porque el amparo se extiende á este punto, pues en su concepto, no puede ser falta de respeto á la autoridad la manifestacion prudente y moderada que se le haga sobre el derecho que se crea tener para hacer ó no hacer tal ó cual cosa; y si en esto no puede haber falta, tampoco debe haber castigo.

Reasumiendo el Fiscal, y con fundamento en la fraccion 1.^a artículo 1.^o de la ley de 20 de Enero de 1869, y en el artículo 5.^o de la Constitucion general de la República, que es la Suprema ley, y que por tanto debe ser obsequida en sus prescripciones por todas las autoridades, á pesar de cualesquiera otras disposiciones en contrario, concluye con proponer á la consideracion del Juzgado de su digno cargo, para su aprobacion, las siguientes proposiciones.

1.^a La Justicia de la Union ampara y

proteje al ciudadano Carlos Martinez contra la Orden del Alcalde 1.^o de esta ciudad en que se le previene ejecute los trabajos personales á que se refiere la comision para que ha sido nombrado.

2.^a Se le ampara y protege asimismo contra la imposicion de la multa que se le ha exigido por la causa expresada.

Monterey, once de Enero de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Antonio Maria Elizondo.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Monterey, Febrero tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo, promovido por el C. Lic. Simon de la Garza y Melo, como apoderado del C. Carlos Martinez, contra una Orden del C. Alcalde 1.^o de esta ciudad en que se le previene que en el término de quince dias forme en union de otro ciudadano el padron de las niñas y niños de la 3.^a Seccion, desde la edad de seis á las de doce y catorce años, á quienes se impone la obligacion de concurrir á las escuelas, conforme al decreto número 34 del Congreso del Estado, de cuyo trabajo trató de excusarse por sus quehaceres particulares, y no habiéndolo conseguido volvió á repetir su excusa, acogiéndose á la garantía que acuerda el artículo 5.^o de la Constitucion General de la República, lo cual dió mérito á que se le impusiera una multa de cinco pesos, ocurriendo entonces á formalizar su queja, pidiendo amparo contra esa Orden que en su concepto ataca la garantía que acuerda dicho artículo, para que á nadie se obligue á prestar servicios personales sin su consentimiento y sin la justa retribucion: visto el escrito y documentos que se acompañaron para fundar la queja; el informe que se pidió á la autoridad para resolver si debía suspenderse desde luego el acto reclamado, como lo solicitó el quejoso; el dictámen del ciudadano Promotor fiscal, y el au-

to en que de conformidad con él se mandaron suspender los efectos de la orden referida: visto el informe con justificación que se pidió á la misma autoridad para resolver el juicio en lo principal, al cual acompañó el decreto del Estado de que se ha hecho referencia en un número del periódico oficial, y las copias de las sentencias que pronunciaron las 2ª y 3ª Salas del Tribunal Superior del Estado, en una queja que hizo un ciudadano contra el Alcalde 1º de la Villa de Marín, acusándolo de responsabilidad por una orden en que consideraba violada la misma garantía que hoy se reclama en este juicio: visto el dictámen fiscal, en que opina este funcionario, que es de decretarse el amparo por las razones que expone, refiriendo lo mas notable de algunos discursos que se pronunciaron en el seno de la representacion nacional, al discutirse el artículo del proyecto de Constitución que contenia la garantía sancionada en el que hoy sirve de apoyo al amparo que se solicita: visto el auto en que se mandó abrir á prueba este negocio, el alegato que presentó el actor, dando el fiscal por hecho el suyo con lo que expuso en el dictámen que se ha referido; y visto todo lo demas que consta de autos y convino tener presente. Considerando: Que el Lic. Garza Melo ha acreditado plenamente, que contra la voluntad de su poderdante, el Alcalde 1º de esta ciudad le impuso la obligacion de prestar el servicio que le encomendó, haciéndole exhibir una multa de cinco pesos, no por faltas de respeto á su autoridad, como aquel asienta y no lo ha probado, sino por haberle manifestado, que sus quehaceres particulares como socio de la casa de comercio de Ayala y Martinez, no le permitian en esta vez desempeñar la comision que le encomendaba, ofreciendo que en otra ocasion obsequiaria cualquiera otra que se le confiara: que el trabajo encomendado á Martinez, fué el de inscribir á las niñas y niños de la sección 3ª de esta ciudad, desde la edad de seis á las de doce y catorce años, con expresion de la edad de cada uno,

el nombre del padre, tutor ó amo que lo tuviere á su cargo, y el de la calle ó número de la casa que estos habitaran, debiendo advertirlos que al concluirse el término de los quince dias fijados para el registro, debian mandar á las escuelas públicas ó particulares á los niños inscritos que no estuvieran ya en ellas: que conocido el trabajo que se impuso á Martinez, la cuestion que debe resolverse es, la de si aquel está comprendido entre los que la Constitución prohíbe que se exijan contra la voluntad del que tenga que prestarlos, y sin la justa retribucion: que el ciudadano Alcalde 1º intenta sostener que el artículo 5º habla de trabajos personales entre particulares, y no de los que llevan por objeto el bien público ó el beneficio de la sociedad, presentando en apoyo de su acerto las copias de las sentencias pronunciadas por las 2ª y 3ª Salas del Tribunal Superior del Estado en que así se resolvió, declarándose sin lugar la responsabilidad que un particular trató de exigir á un Juez de la Villa de Marín que lo puso preso, por haberse rehusado á prestar un servicio personal que acuerda la Constitución general en el artículo citado: que estando prevenido por el 101 de la misma Constitución, que los Tribunales de la federacion son los que deben resolver las controversias que se susciten por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, las sentencias que se han presentado no pueden considerarse como decisiones de una autoridad competente, sino como una mera opinion de los abogados que las dictaron, sobre la inteligencia que debe darse al artículo de que se trata: que esa opinion no es acertada, ni corresponde á la letra y espíritu de dicho artículo, como lo ha demostrado el ciudadano Promotor fiscal con razonamientos de mucho peso, trayendo en su apoyo los discursos que se pronunciaron en el seno de la representacion nacional al discutirse el artículo del proyecto de constitucion en que se establecia la garantía del

trabajo personal: que de los principios e ideas que se desarrollaron en la discusión, se ve claramente, que el trabajo encomendado á Martínez está comprendido en el artículo 5º citado, y que no debió exigírsele desde el momento en que se rehusó á prestarlo, ni menos pudo apoyarse en esto la multa que se le hizo exhibir. Por tales consideraciones y fundamentos, y de conformidad con los artículos 5º y 101 de la Constitución general, 1º, fracción 1ª, y 3º de la ley Orgánica de 20 de Enero de 1869, este Juzgado de Distrito resuelve: que la Justicia de la Unión ampara y protege al ciudadano Carlos Martínez contra la orden del Alcalde 1º de esta ciudad que le impuso la obligación de levantar el padron de las niñas y niños de la 3ª sección, desde la edad de seis á las de doce y catorce años, por haberse violado en ella la garantía que establece el artículo 5º de la Constitución general de la República.

Hágase saber esta resolución, publíquese en el Periódico Oficial del Estado y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión, mandándose copia de esta sentencia y del dictámen fiscal á la secretaría de la misma Suprema Corte conforme á la circular que expidió en 31 de Diciembre último. Yo el Juez de Distrito de este Estado así lo resolví, mandé y firmé, actuando con testigos de asistencia: doy fé.—*Lic. José María Martínez.—A., Carlos Landeros.—A., Abelardo Morales.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Nuevo-León por el ciudadano Lic. Simón de la Garza y Mello, en representación del ciudadano Carlos Martínez, contra el Alcalde 1º de Monter-

rey, ciudadano Lic. Anastasio A. Treviño, quien dispuso que Martínez formara el padron de los niños y niñas de la sección 3ª de la ciudad, á que se refiere el decreto de la Legislatura de 30 de Noviembre de 1870, publicado el 30 de Diciembre del mismo año; y considerando: que en el expediente consta que Martínez rehusó formar el padron, á pesar de cuya resistencia el Alcalde 1º de Monterrey insistió en que lo formara, y que este acto es la violación del artículo 5º de la Constitución federal. Se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Nuevo-León el 3 del presente mes y año, que resuelve: Que la Justicia de la Unión ampara y protege al ciudadano Carlos Martínez contra la orden del Alcalde 1º de esa ciudad, (la de Monterrey), que le impuso la obligación de levantar el padron de los niños y niñas de la 3ª sección, desde la edad de seis años hasta la de doce y catorce años, por haberse violado con ella la garantía que establece el artículo 5º de la Constitución federal de la República.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito de Nuevo-León, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Son copias. México, Marzo tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta, oficial mayor.*